



PROJECT MUSE®

Intelectuales, izquierda(s) y poder en Cuba: Oteando el
horizonte en tiempos de cambio

Armando Chaguaceda

Cuban Studies, Volume 43, 2015, pp. 151-168 (Article)

Published by University of Pittsburgh Press

DOI: <https://doi.org/10.1353/cub.2015.0013>



➔ *For additional information about this article*

<https://muse.jhu.edu/article/588713>

Intelectuales, izquierda(s) y poder en Cuba: Oteando el horizonte en tiempos de cambio

RESUMEN

El texto aborda, a partir de un conjunto de trabajos y acontecimientos recientes, algunas de las problemáticas teóricas, posicionamientos públicos y repercusiones políticas que caracterizan la constitución y el accionar de la intelectualidad de izquierda —y de posturas específicas dentro de esta— en la Cuba actual.

ABSTRACT

The text, which is based on a number of works and recent events, covers some of the theoretical problems, public positioning, and political repercussions that characterize the constitution and actions of leftist intellectuals—and specific positions within it—in contemporary Cuba.

Este texto revisita la problemática de los intelectuales de la isla, reflexionando en torno a la relación de aquellos con el poder instituido, a la impronta de acontecimientos y coyunturas recientes, así como a la existencia en su seno de diversas posturas ubicables a la izquierda del espectro político e ideológico cubano. Se trata de una sistematización de reflexiones recientes a la vez que un intento, exploratorio, de mapear los posicionamientos y horizontes que caracterizan un segmento de la reflexión intelectual y la acción política en los actuales escenarios de reforma que vive el país.

Precisando conceptos

No existe una definición universalmente aceptada de intelectual, lo que conlleva cierto uso impreciso del término en discursos cargados de un sesgo normativo, autorreferente —pues los elaboran y difunden intelectuales— o movilizador frente a los poderes instituidos. Para Karl Mannheim los intelectuales son un conjunto de actores diversos, productores de ideas e ideologías,¹ objetivamente separados de las clases en pugna en el seno de una sociedad. En similar formulación, Michael Lowy (1978) los define como creadores de productos ideo-

lógico-culturales, diferenciables de los meros administradores y difusores de bienes culturales. En su obra, Antonio Gramsci enfatiza, a través de la categoría de intelectual orgánico, un rol revolucionario expresado a partir de la vinculación del intelectual —en su condición de especialista y actor político— con una formación política (el partido) desde donde opera —mediante una síntesis de teoría y praxis— en pro de la reforma intelectual y moral de la sociedad. Condición ésta que en Cuba, aunque constantemente cuestionada por la real naturaleza del nexo subordinado que le confiere la máxima dirección del país a la labor y gremio² intelectuales, parece corresponder a la (auto)identificación de identidades, roles y horizontes de acción de quienes, en la Isla, se denominan a sí mismos intelectuales revolucionarios (Guanche 2008).

En este texto definiremos a la intelectualidad, de forma abarcadora, como el segmento poblacional que, en una sociedad y tiempo específicos, engloba aquellos creadores de sentidos, capaces de registrar, reformular y difundir los conocimientos más avanzados del arte y las ciencias. Los intelectuales elaboran y transmiten ideas que trascienden el conocimiento especializado; fijando parámetros de debate cívico dentro de la esfera pública.³ Son actores que socializan la producción de saberes y valores a través de las disímiles estructuras y redes sociales y comunicativas que habilitan el intercambio y recepción de ideas de cara a una opinión pública y en el seno de colectividades diversas (Illades 2012). Los intelectuales poseen una íntima relación con ciertos conocimientos y valores asumidos por la sociedad como trascendentes y relevantes (justicia, libertad, verdad, razón) para su propia constitución y desarrollo.

Existen diferentes tradiciones en el estudio de los intelectuales: una, relacionada con la cultura, comprende al intelectual en tanto letrado y artista y enfatiza elementos tales como la escolaridad y la ocupación. Otra, vinculada al poder, atiende al intelectual en tanto productor ideológico, experto y, en ocasiones, actor político. Según el tipo de mirada, Bobbio (1998) reconoce la posibilidad de abordar el estudio de los intelectuales con un carácter eminentemente descriptivo, para responder quiénes son, cuál es su lugar en la sociedad, cuáles son las tipologías del gremio o, desde un punto de vista funcional, se presta atención a problemáticas como la del nexo de estos sujetos con la cultura y la política. Como actor social los intelectuales han sido objeto de un análisis de tipo sociológico —que los aborda en tanto grupo social y en su relación con otros grupos y clases sociales—, histórico —centrado en su evolución e incidencia en un país y sociedad determinados—⁴ o, en ocasiones, con una mirada híbrida, como la que elegimos en este texto.

En su relación con la política, la intelectualidad opera a partir de lo que Bobbio (1998) ha denominado una “autonomía relativa de la cultura”, entendida esta última en un sentido amplio como una esfera de producción de símbolos, conocimientos e ideologías, irreductible a la esfera de lo político organizado y lo institucional. A partir de este nexo, estrecho y conflictivo, los intelectuales

establecerían varios tipos de vínculos con el fenómeno del poder: lo detentarían de forma directa como gobernantes, influirían sobre este como consejeros, lo legitimarían como ideólogos, lo confrontarían —como intelectuales públicos,⁵ disidentes, revolucionarios⁶— o, en ciertos casos, se abstraerían explícitamente de tomar partido en relación con este. En realidad los intelectuales —en tanto individuos o grupos— se enfrentan entre sí, en atención a los valores y proyectos de sociedad que defienden y proyectan, a la vez que construyen relaciones complejas y conflictivas con los políticos profesionales.

En la época contemporánea —y más específicamente a partir del impacto de las políticas neoliberales— la intelectualidad ha sufrido los efectos de mutaciones de considerable calado. Ha sido notificada la aparición y/o reforzamiento de un tipo de expertos profesionales que ven con arrogancia y desdén a una población que deviene objeto de sus decisiones en materia de política pública, en un contexto sociocultural de fragmentación de saberes, profesionalización de políticas y separación de los públicos (Bauman 2003).⁷ Situación que ha llevado a teóricos del fenómeno intelectual a insistir en la necesidad de apoyar, desde el gremio, a aquellos grupos sociales subalternos en sus búsquedas de conocimiento y poder; a la vez que se produce una autocrítica en torno a la misma labor intelectual y una combinación de las experticias individuales en proyectos colectivos (Bourdieu 2003).

Si se avanza en una mirada más detallada del fenómeno, vemos que las clasificaciones al interior del campo son múltiples y, con frecuencia, fundadas en rasgos comportamentales o identitarios. Bobbio (1998) ha escrito acerca de las modalidades del ideólogo y el experto, diferenciados por sus respectivas tareas dentro del contexto sociopolítico.⁸ Los ideólogos proporcionarían principios guía (proyectos, valores, ideas) orientados a los fines de la acción política, mientras que los expertos ofrecerían principios medio (conocimientos técnicos, agendas de política) para la solución de problemas concretos.⁹ Estos roles no se expresarían únicamente desde el poder: el filósofo turinés destaca como existen manifiestos hechos por ideólogos que alertan sobre el efecto de determinada acción política con relación a valores cívicos (ej. una acción estatal restrictiva de la libertad de prensa), al tiempo que los manifiestos¹⁰ hechos por expertos pueden llamar la atención, por ejemplo, sobre las consecuencias particulares de una decisión de política pública (ej. una obra en construcción que tenga un alto impacto social y ambiental), de modo tal que sus identidades y proyecciones pueden confluir en la esfera pública, con más frecuencia de lo supuesto.

El contexto insular

En Cuba, durante el pasado medio siglo, cristalizó una institucionalidad ungida con la vocación (y el poder fáctico) para controlar los bienes públicos, delimi-

tar el campo cultural, imponer patrones ideológicos y definir, estrechamente, las pautas de la política cultural, todo esto en un país habitado por un público dotado con altos índices de alfabetización e instrucción.¹¹ El afianzamiento del autoritarismo político y social, extendido al mundo de la cultura y las ideas, acotó las opciones no sólo para los intelectuales públicos, sino incluso estableció un marco demasiado estrecho para la existencia misma de los intelectuales orgánicos leales al sistema, lealtad siempre definida —en sus formas y horizontes— por la voluntad política de la máxima dirección del país. La cual ha preservado, en todo momento, su capacidad para definir qué idea o postura es considerable como revolucionaria.¹²

Cualquier mirada sobre esta relación entre el estado y los intelectuales debe ser historizada y, por tanto, comprendida a partir de los equilibrios y consensos sociales siempre contingentes establecidos entre las tendencias abrigadas en el proyecto de 1959. Es entonces preciso considerar que la preponderancia de dos imaginarios (el marxista-leninista y el nacionalista revolucionario) sobre las demás tendencias ideológicas de la Revolución se saldó, a fines de la primera década del proceso (Guanche 2008; Martínez, 2006), con la institucionalización del régimen político y la centralización simbólica y efectiva del poder en torno al liderazgo carismático de Fidel Castro.

El socialismo de estado criollo ha demostrado que el mundo intelectual puede expandirse, crecer en cantidad y, en ciertos modos y tópicos, en calidad; sin dejar de sufrir el control estatal, mediante una política selectiva de mecenazgos y exclusiones, que tributa a la precariedad material y discursiva de la esfera pública cubana (Chaguaceda 2011).¹³ De tal suerte, el decurso de tal evolución, en el caso cubano, abarca una etapa experimental —los heroicos sesenta—, clausurada por la ortodoxia asfixiante de los setenta, a la que seguirá un deshielo producido desde inicios de los ochenta y profundizado en los noventa. Proceso este último que, bajo el control combinado de los viejos aparatos ideológicos y los nuevos funcionarios culturales, hizo posible cierta expansión de los márgenes de la creación y crítica autónomas, previa reconceptualización (y reconducción) de la cultura como una suerte de espacio neutral (y neutralizado) ajeno a las confrontaciones políticas (Díaz 2009, 22, 165–198).

Pero lo que, fenoménica y estructuralmente, se visibiliza y constata en la Cuba de inicios del siglo XXI es un creciente desfase entre la política “política”, que define las reglas del juego —en especial aquellas no escritas que difieren o incluso violentan la normatividad formalmente vigente— y la política cultural forjada en las instituciones y burocracias del mundo artístico e intelectual. Al impactar la primera sobre el exiguo territorio de la segunda aparece el mito de las dos políticas culturales, paralelas y distintas, desarrolladas dentro del mismo entramado institucional y social.¹⁴ Las acciones del aparato ideológico, del sistema educativo y de los medios masivos, como regla,

procuran garantizar, de forma mucho menos elaborada, el control político y la reproducción del menguante consenso en torno al régimen y sus políticas. Mientras, las instituciones del Ministerio de Cultura y las asociaciones de creadores asociadas a este están abocadas a facturar una hegemonía del discurso revolucionario, a partir de condiciones de posibilidad —y permisividad— para la creación artística y la deliberación intelectual algo más autónomas.

Esta aparente confusión entre dosis de apertura y lastres de inmovilismo permite explicar la coexistencia de espacios ganados a la censura y el dogmatismo (con connivencia o apoyo institucionales) y de gestos y retóricas de respeto —siempre conflictivo— hacia algunos proyectos y creadores burocrático-autoritaria heterodoxos, con la permanencia de prácticas medievales de represión y censura, y la apelación instrumental a una idea de cohesión nacional, restrictiva del propio sujeto popular y socialista. A mi juicio, en la Cuba actual parecen existir tres carriles, velocidades y horizontes diferenciados aunque, ocasionalmente, coincidentes: los de la *política política*, vigilante y sancionadora —encarnada en instituciones y acciones políticas y policíacas que abarcan desde el aparato ideológico del Comité Central a los órganos de la contrainteligencia—; los de la *política cultural*, seductora y administradora de premios y permisos —canalizados por el Ministerio de Cultura y entes como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz—; y los de una *política de la cultura* —antes definida por Bobbio— acosada pero creciente, expresada en la obra, intervenciones e interacción de artistas, pensadores y públicos afines, como los que se nuclean en espacios como OMNI, Observatorio Crítico, Rotilla (y las iniciativas actuales del proyecto Matraka), el Festival Puños Arriba, o Estado de SATS. Espacios y acciones que, a menudo, se entrecruzan bien sea por la pertenencia múltiple de sujetos a instancias ubicadas en estos tres carriles (ej. miembros de las asociaciones gremiales que asisten a los espacios alternativos) o por la colaboración puntual en actividades que ligan lo oficial y lo emergente (ej. festivales de *hip-hop*).

Hay sectores de la intelectualidad insular que responden a este orden de cosas mediante la constitución de una suerte de *política de los sin poder*; contraparte sociocultural del *mainstream* institucional percibido como ajeno, arcaico o adversario. Los años transcurridos desde el parteaguas (geopolítico e ideológico) de 1989 han sido marcados por el paso de trayectorias de compromiso activo a otras de neutralidad pasiva, en medio de un repliegue por parte de la intelectualidad al terreno experto, alejado tanto del oficialismo, como de la crítica orgánica y/o opositora. Algunos creadores se refugian en pequeños círculos (de amigos y públicos leales) para construir, en comunión, una sociedad imaginaria, paralela a la real, afincada en abstracciones y generalizaciones, vehiculizada por las políticas literarias y la educación teórica. En esta Cuba posmoderna, se han actualizado añejas tradiciones letradas de defensa

de la autonomía del arte —caracterizadas, al decir de una colega curadora, por el pragmatismo y cinismo de ciertos creadores noveles. Postura que aparece prudentemente descontaminada de cualquier lenguaje o apelación políticos explícitos, lo que, de paso, conecta muy bien con las exigencias del mercado global.¹⁵

El marco (y abono) para estas actitudes las encontramos en Cuba en la dialéctica perversa que articula el anti-intelectualismo de los políticos y de buena parte de la población —anti-intelectualismo que se ve reforzado por la anémica política de fomento a la información y debate públicos— con las repetidas muestras de insolidaridad gremial. Desde ahí, habría que considerar con bastante reserva la tesis oficial de una supuesta “actual unidad del movimiento intelectual cubano” capaz de posibilitar una resistencia ante las injusticias (Heras en Heras/Navarro 2007, 70). Sin embargo, puede aventurarse como hipótesis que tal vez, en lugar de una simple transacción entre libertad y temor, posibilidad y costos, privilegios y lealtades, lo que el mural refleja es un silencioso reconocimiento mutuo de fuerzas entre una institucionalidad aún poderosa, responsabilizada por la *política política* y la *política cultural*; y una intelectualidad relativamente tímida y atomizada, pero mutante y crecientemente conectada con redes transnacionales, en cuyos foros e ideas cobra vida una *política de la cultura*. En tal escenario, un grave problema de fondo —que se suma al de la insolidaridad gremial y la intencional fragmentación de la esfera pública, derivada de las prácticas de censura y autocensura— es la falta de transparencia de la gestión de los espacios de creación, difusión y deliberación culturales e intelectuales isleños. Situación ésta reforzada por una política que consagra la asimetría de recursos, poder y medios de difusión de ideas, entre una sociedad porosa, diversa y creativa que los demanda, por un lado, y una mayoría de agencias estatales ignorantes de la tradición crítica democrática —incluidas las tradiciones afines de izquierdas— y de la lógica política y comunicacional del siglo XXI, que los controla y administra. Aunque la pluralización de medios electrónicos de difusión de ideas favorece tendencialmente a la primera, todavía asistimos a espacios deliberativos —como los de foro Último Jueves del Temas y el Centro Cultural Criterios— autoritaria o personalistamente administrados (por los funcionarios del nivel superior o por sus propios animadores) y precariamente defendidos frente a las guerras de baja intensidad desarrolladas por el pensamiento estalinista y su correlato neoliberal, dentro y fuera del país. Problema que agrava, además, el hecho de que la composición del público que asiste a estos espacios ilustrados —y acotados— de debate da cuenta de la concentración del capital cultural, económico y social —multiplicados por la herencia del linaje y la endogamia— en determinados estratos poblacionales cubanos.

Frente a ello, ciertamente los desafíos son enormes pero no pocos gestos y movimientos socioculturales van comprendiendo los costos nefastos de

cualquier opción de sobrevivencia que implique, como se dice en el ambiente intelectual cubano, “preservar los espacios” vaciando sus sentidos. Toda vez que sostener un foro estéril o de acceso restringido —lo cual parece, a ratos, imponerse como pauta institucional— no sirve sino para legitimar las exclusiones y para decorar la censura al pensamiento crítico. Aparentando lo que hoy resulta prácticamente inexistente dentro del mundo intelectual y la esfera pública isleña: pluralidad, respeto y diálogo como condiciones generales de la convivencia social.¹⁶

Mas no todo es, simplemente, retirada, pragmatismo y testimonio. También el escenario del nuevo milenio revela la emergencia en Cuba de sociabilidades e iniciativas crecientemente plurales y politizadas, críticas y autónomas (Geoffray 2012) que buscan transformar el espacio público nacional, de-sacralizando ídolos, apelando a formas de horizontalidad y autonomía que, sin desconocer el sitio y rol del individuo en sus facetas de creador, público y ciudadanía, apuestan a favor de una rearticulación de los mejores valores solidarios y democráticos presentes en los orígenes de la Revolución de 1959. Desde la lógica de lo diverso —algo más tolerada, aunque no plenamente aceptada bajo el régimen imperante— la identidad racial, cultural y sexual, la espiritualidad, el ambientalismo, la educación liberadora, el comunitarismo barrial forman algunos de los contenidos y referentes de las nuevas iniciativas. Dentro de la perspectiva del pluralismo —a la cual se contraponen el andamiaje legal, propagandístico y represivo oficial— van cobrando nitidez las posturas liberal, socialdemócrata, democratacristiana, etc., que animan revistas, foros, plataformas y personalidades del activismo y reflexión sociopolíticas autónomas.

En los últimos años, al lado de la retórica aperturista, la desc ciudadanización y los silencios cómplices, ha acaecido una serie de sucesos que testimonian la persistencia de una intelectualidad crítica. Además de los acontecimientos relacionados con la llamada guerrita de los emails y sus secuelas (Leyva y Somohano 2008; Ponte 2010), habría que rastrear las valiosas intervenciones públicas de creadores en los cónclaves de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), en las muestras de la Bienal de la Habana, en las actuaciones semi-clandestinas del Festival Rotilla, en los nuevos temas de crítica social de artistas del *hip-hop* y el rock. También en las acciones de ciudadanos y proyectos autónomos como Espacio Laical, Estado de SATS y Observatorio Crítico.

Las izquierdas al ruedo

Los actuales vientos de reforma sacuden el proceso cultural y político de un régimen socialista de estado, cuya esfera pública sigue signada por la precariedad —en sus dimensiones material y simbólica— y por la fragmentación de sus públicos, discursos y acciones (Chaguaceda 2011). Orden de cosas donde

habita una ciudadanía frágil en lo civil —dentro de un contexto donde el *estado de derecho* es sustituido por los amplísimos y arbitrarios derechos del estado—, en lo político —encapsulada en un modelo de participación movilizativa, fragmentaria y parroquial, y una representación y control social prácticamente nulos— y, a despecho del discurso oficial y de nuestras asentadas creencias, en lo social —ante la reducción galopante de prestaciones sociales, hecho incontestable en ausencia de mecanismos de impugnación y garantías legales—; configurando un estatus poco halagüeño para el protagonismo individual y colectivo. Todo ello confluye en un escenario de agotamiento del pacto social posrevolucionario, y por consiguiente en la paulatina clausura del esquema de gobernabilidad sobre aquel sustentado.¹⁷ Lo que supone una necesidad, concientizada —en diversas formas, urgencias y sentidos— por segmentos de la población, de los intelectuales e incluso de las élites, de reformar el orden vigente, cuestión que despierta notables y disímiles resistencias, debates e incertidumbres sobre los modos de cómo hacerlo con eficacia y a tiempo.

Es en esta coyuntura —coincidente, en extensión y momentos, con el ascenso de Raúl Castro a la conducción de la nación (2006 a la fecha)— que se producen tres hitos clave para comprender la (re)definición y futuros del nexo entre los intelectuales, las alternativas de izquierda y el poder reinante. En enero de 2007, la llamada Guerrita de los Emails constituyó un caso prácticamente inédito —de ahí la posibilidad misma de su realización— de articulación autónoma de demandas de los intelectuales y, sobre todo, de interpelación por estos a los funcionarios, dando cuenta de una expansión del activismo de los primeros y mostrando la transnacionalización de la esfera pública cubana, más allá de las rígidas y precarias fronteras del gremio, del estado nación y de las adscripciones ideológico-institucionales. La Guerrita sacó a relucir la contraposición de posturas existente, dentro de la izquierda intelectual insular, entre quienes continúan viendo los actos represivos de los años setenta como meras desviaciones de una línea, fundamentalmente correcta, de la Revolución y aquellos que consideramos tales sucesos como manifestaciones, siempre acechantes, de problemas estructurales (represión, censura, sujeción de la ciudadanía y esfera pública) típicos del modelo socialista de estado, irresolubles en tanto no se modifiquen, sustantivamente, los rasgos autoritarios inherentes a aquel. Lo cual supone, a la postre, las demandas por la sustitución del modelo por otro cabalmente democrático.

Un segundo hito lo constituyó la asunción plena de poderes, desde 2008, por parte de Raúl Castro y la implementación, a partir de 2011, de un paquete de reformas impulsado tras la elección —más bien ratificación formal— de los máximos cargos estatales en la Asamblea Nacional cubana y en ocasión de la celebración de sendos conclave partidistas (Conferencia y Congreso) que sancionaron el programa reformista codificado en los Lineamientos. Estas transformaciones (y la etapa que abren) marcarán el inicio del tránsito,

dilatado y siempre abierto a las contingencias, a un modelo económico y, en segundo orden, a un régimen político diferentes, caracterizados por una mayor presencia de elementos de mercado y actores privados, acompañados de cierta expansión o permisividad ante el debate público y, en la esfera política, por un énfasis en la institucionalización y los límites (temporales y legales) de los mandatos de los principales cargos del estado.

El tercer y último hito que identifico, en estrecha relación con los anteriores, es la reciente implementación (2012, 2013) de dos conjuntos de transformaciones de amplio calado: las que se agrupan dentro de la tantas veces postergada reforma migratoria y en la tímida apertura en telecomunicaciones, cuyos primeros pasos se dieron con la creación de telepuntos y el anuncio de una futura oferta de Internet a privados. Hechos relevantes por cuanto significan una recuperación de derechos, incrementan la proyección internacional (y, a la postre, interna) de la disidencia y los intelectuales críticos cubanos, y expande, forzosamente, las fuentes y fronteras de la información y el debate internos. Vistos en conjunto —y en su consecutividad— semejantes momentos parecerían dar pistas para comprender las nuevas condiciones que se abren, dentro y fuera del campo intelectual, para una reflexión, crítica, y activismo de izquierdas dentro del actual proceso de reformas.

Hablar de izquierdas nos obliga, siempre problemáticamente, a ubicar los contextos, épocas, tradiciones y genealogías que dan sentido y corporeidad a dicha postura ideológica y política. Procurando evitar un largo debate y rebasando la útil —pero incompleta— definición clásica de Norberto Bobbio —que la identifica a partir de la priorización de la igualdad por sobre la libertad—, deberíamos poder definir la izquierda a partir de algunos contenidos básicos que, en las condiciones del contexto regional (latinoamericano) y nacional, dibujen hoy sus plurales agendas de cara a los problemas políticos del presente cubano, combinando la descripción de lo existente, las propuestas viables de cambio y la vocación normativa para repensar una sociedad sostenible y decente. Entre estas características, encontraremos un espacio para la justicia e igualdad en tanto preocupación sustantiva de programas políticos y de diseño de políticas públicas progresistas, acompañados de cerca por la defensa o recuperación de cierto rol del estado (democrático) cómo actor responsabilizado de la regulación macroeconómica, la promoción del desarrollo y la protección social. Dicha adscripción también supondría, sin suprimirlos, la defensa y expansión de la democracia más allá de sus formatos político-institucionales hoy hegemónicos (parlamentos y partidos), con énfasis en la participación ciudadana en movimientos y organizaciones sociales y en mecanismos de democracia directa, pero cuidando no repetir los errores y rasgos de los modelos autoritarios del pasado siglo. Y, por último, el posicionamiento progresista implica una atención a las llamadas minorías, a las nuevas identidades así como a problemáticas transversales, crecientes y complejas, como la ambiental.

Desde esta definición de izquierdas, es posible ubicar en la Cuba actual tres posturas, más o menos identificables —cada una conformada por diversas personalidades, grupos, plataformas públicas y agendas de cambio—, que hemos definido como la izquierda orgánica, la alternativa y la opositora. Dentro de los tres conjuntos habitan actores y discursos políticamente valiosos, intelectualmente sofisticados y, en diverso grado, favorables a una redefinición del nexo asimétrico y autoritario que hoy existe entre el estado (y sus funcionarios) y la intelectualidad, la esfera pública y, en general, la sociedad cubanas. Dejo abierta, con esta presentación, la posibilidad de un mapeo y análisis más exhaustivos de dicho fenómeno, incapaz de agotarse en estas apretadas líneas y susceptible de desarrollos ulteriores.

La izquierda orgánica se define a sí misma por su adscripción a los valores e ideas que identifican con la revolución. Desarrollan su reflexión y debate dentro de los marcos del régimen político (sus instituciones, agendas y lineamientos ideológicos) en sintonía con las posturas establecidas por los máximos dirigentes del estado. Aún criticando sus elementos más obsoletos y antidemocráticos, consideran al modelo reformable, lo que exponen tanto en publicaciones, foros y textos de corte académico (revistas, congresos) como opináticos (blogs).¹⁸ Su accionar tributa, conflictiva y simultáneamente, a las políticas oficiales de administración del debate y fragmentación de la esfera pública, por un lado, y a la necesaria introducción de temáticas relevantes —desigualdad, racismo— y al mantenimiento de cierto espacio de reflexión, valioso en coyunturas de inmovilismo o conservadurismo político y teórico (ej., Batalla de Ideas). Esta postura es congruente con el patrón de política cultural construido a partir de los años noventa por Abel Prieto, el cual sirvió para reformular la hegemonía estatal (sustituyendo el discurso marxista por un nacionalismo de supuesta raigambre martiana) mediante un arsenal de prácticas de tolerancia, cooptación y censura selectivas. Política cultural que hoy se encuentra superada por los hechos y por la propia riqueza y amplitud de perspectivas del debate en torno a temáticas de la historia, cultura y política nacionales, dentro y fuera de la isla.

La segunda postura es la que defino como alternativa, la cual rebasa en sus posturas de debate e incidencia públicos los ejes y límites fijados por el discurso revolucionario, posibilitando la crítica estructural del modelo de socialismo de estado aún vigente. Sus foros, publicaciones e intervenciones son más abiertos que los orgánicos aunque aún persisten, en su seno, problemas en el diálogo —por razones ideológicas o personales— con representantes del sector opositor. Esta tendencia —representada por los individuos y colectivos que conforman el Observatorio Crítico¹⁹— posee una diversidad temática apreciable y tiene la potencialidad de operar en el tendido de puentes entre intelectuales y públicos diversos y, en general, de proyectarse hacia aquella ciudadanía que rechaza ubicarse en contaminadas coordenadas políticas. Su desarrollo

corresponde con la expansión de la diversidad social, con la reacción a los mecanismos de la *política cultural* vigente —crecientemente incapaz de integrar, de forma atrayente y sin sacrificio de autonomía, a voces jóvenes y críticas de izquierda— y se nutre de la emergencia de sociabilidades autónomas, síntomas de sociedades poscomunistas y posmodernas.²⁰

Por último la postura opositora plantea una ruptura con el régimen político vigente, aunque apela para ello a mecanismos legales y no violentos. Sus espacios y publicaciones son acotados de forma permanente por la represión y la fragmentación oficiales de la esfera pública, que hace a otros colegas —de las izquierdas orgánica y, en menor medida, alternativa— evitar coincidir con los opositores en foros o proyectos. Con diverso grado de sostenibilidad material (en general precaria), a través de sus planteos se percibe una mayor superación de la tradición de no reconocimiento intelectual hacia las otras posturas, aun cuando subsistan recelos provenientes de la misma situación de acoso sufrida y de discrepancias con las ideas defendidas por sus contrapartes orgánicas y alternativas. En su seno se desarrollan hoy importantes esfuerzos por trascender la noción minimalista de democracia, de corte liberal, que abrazan sectores mayoritarios de la oposición, incluyendo en la agenda las problemáticas sociales —raciales, sindicales, femeninas— y el explícito rechazo a la injerencia de estados extranjeros, en particular el embargo/bloqueo de E. U. Un referente destacado de esta corriente lo constituye la plataforma socialdemócrata Arco Progresista, donde resalta la labor política e intelectual del historiador Manuel Cuesta Morúa, quién también anima el Comité Ciudadano por la Integración Racial, un movimiento de reivindicación de los derechos de negros y mestizos.²¹

Son visibles las especificidades y diferencias entre los diversos planteos programáticos y de agenda de estas izquierdas cuando se contrastan, por ejemplo, sus posturas frente a la temática racial, un problema relevante e irresuelto de la sociedad cubana que cobra creciente visibilidad tanto en discursos alternativos como oficiales. Según la Comisión Aponte de la UNEAC, integrada por intelectuales orgánicos a la política oficial, la problemática racial encuentra en la Revolución —con su obra de justicia social e “igualdad de oportunidades para todos los cubanos”— el marco práctico e ideológico para resolver “la herencia de la desigualdad económica, del posicionamiento social y de subvaloración cultural” que no ha podido ser eliminada en el tiempo extremadamente corto del poder revolucionario. Reconociendo que “[n]o basta con leyes de beneficio popular” sino también “de transformar estructuras sociales y desarraigar prejuicios enquistados” la Comisión define, sin embargo, una línea defensiva y divisoria afín a la postura del estado respecto a “algunos cubanos que buscan en el rejuogo político la supuesta solución a este delicado tema”, llamando, de forma excluyente, a que los problemas del país sean “solucionados por los propios cubanos”. Por último identifica un conjunto de acciones en

curso, siempre dentro de las instituciones oficiales y el amparo de la consigna “con la Revolución todo, sin la Revolución nada” que ha definido la política cultural del estado cubano desde 1961.²²

Por su parte, los activistas de la Cofradía de la Negritud —colectivo adscrito a la red Observatorio Crítico— sostienen una visión alternativa a la anterior ya que, si bien dirigen sus recomendaciones a las instancias oficiales (Parlamento, sistema educacional, organizaciones de masas, entre otras) no sustentan su discurso en una invocación reiterada a “la Revolución y sus conquistas”, sino que demandan el “derecho a la existencia legal de organizaciones sociales y comunitarias que se propongan contribuir a los esfuerzos de la nación dirigidos a eliminar el racismo, la discriminación y la desigualdad raciales”. Asimismo hacen hincapié en los factores estructurales (pobreza, marginación, desigualdad) que reproducen la situación desfavorecida de negros y mestizos, a la vez que visibilizan las acciones y discursos que en los medios masivos, la policía, y diversas entidades del estado y la sociedad tributan al mantenimiento de esa situación. Para finalmente exigir el establecimiento “como objetivo social prioritario de las políticas del país la promoción del principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas de manera real y efectiva”.²³

En cuanto a la perspectiva opositora, las propuestas del Comité Ciudadanos por la Integración enmarcan la lucha por la igualdad y contra la discriminación racial dentro de una agenda de promoción del diálogo, con la convivencia y el pluralismo como procesos y entornos de desenvolvimiento de la nación cubana, apelando al concurso de cubanos residentes en la isla, a la diáspora y en articulación con otras luchas y actores antirracistas transnacionales. Para cumplir esos objetivos —y en sintonía con un punto de llegada cifrado en la noción de posracialidad— el Comité impulsa acciones y proyectos cívicos, sociales, intelectuales, académicos o culturales —preservando su independencia de naturaleza y objetivos— para atender los derechos y necesidades de las minorías o grupos étnicos, en procura de instalar la igualdad y el respeto como fundamento de las relaciones sociales e interétnicas.²⁴

El día después de mañana . . .

La intelectualidad juega un papel importante en las coyunturas de cambio político (reformistas, transicionales o revolucionarios) y, en especial, en los procesos de expansión de la democracia. Su aporte es relevante en tanto el fenómeno democrático posee un sustrato cultural (cognitivo y afectivo) que rebasa las instituciones enmarcadoras del proceso político y los fundamentos materiales de la vida social (Lechner 1990), estructurando todo un campo de discursos plurales y concurrentes, capaces de interpelar, mediante referencias y cuestiones comunes, a los participantes y las políticas en curso (Chaguaceda 2010). El

espacio clave para el ejercicio de esta deliberación intelectualmente motivada, se halla en las diversas modalidades de la esfera pública y suele trascender al terreno de la lucha política en diversos formatos organizacionales (partidos, movimientos) y movilizativos (campañas, pronunciamientos, acciones de calle y protesta) en estrecha relación con el contexto nacional y social.

En la Cuba actual, son visibles el visible agotamiento de las formas ensayadas (y prometidas) de ilustración marxista-leninista y el paulatino declive del nacionalismo instrumentalizado, a través de las *políticas culturales* instituidas, para controlar la reflexión y acción intelectuales y para gerenciar los procesos de acumulación y socialización desplegados por los creadores entre las fronteras del mercado global o la ideología local.²⁵ Ante la urgencia de generar, desde los márgenes de la institucionalidad, nuevas estéticas, poéticas y políticas pos-totalitarias y pos-neoliberales, es preciso primeramente quebrar la fragmentación inducida de la esfera pública insular, a través de acciones específicas de reconocimiento y deliberación intelectuales y políticas, sin que ello signifique diluir las agendas particulares e identidades específicas de los concurrentes, sean individuos o colectivos. Ello supone el fin de la complicidad para con las conocidas prácticas de invisibilización, censura, represión (actos de repudio) dentro del gremio y de cara a la ciudadanía. Y la apuesta por un diálogo no excluyente con los sujetos a partir de sus posturas e ideas concretas y no de los fetiches que se construyan en torno suyo.

En un texto reciente, Haroldo Dilla (2014) aborda la redefinición de los campos político-ideológicos en la Cuba actual —y el alineamiento intelectual en torno a estos— identificando como tendencia dominante un escoramiento sistémico a la derecha, impulsado por fuerzas conservadoras del statu quo —miembros de la élite, funcionarios del sector mixto de la economía, capos del mercado negro, artistas prominentes y propietarios de los negocios privados más redituables— frente a las que el discurso de la izquierda cubana no ha podido convertirse en alternativa de masas, con capacidad para revertir la ofensiva hegemonizante del nuevo capitalismo de estado.

Frente a tal panorama, las izquierdas cubanas —y en especial sus intelectuales— tendrán que dibujar programas viables para ganar adeptos y concretar, en el curso de la transición en curso, un modelo de democratización sustantiva capaz de sustituir al orden vigente y sus más previsibles mutaciones. Tal propuesta implica abogar por un modelo de economía mixta, con mercado ampliado pero políticamente acotado, para evitar la hegemonía del capital en áreas como las políticas sociales y en la regulación pública de sectores claves de la economía. Supone también abrazar, en sus programas, el fomento de formas de economía social y protección a trabajadores y consumidores. Todo ello sería viable, únicamente, a partir del establecimiento de un estado de derecho que ofrezca garantías a la gente frente la acción depredadora de funcionarios y empresarios domésticos o foráneos; un estado de derecho que auspicie los

procesos e instituciones de innovación democrática y participación ciudadana capaces de corregir los conocidos problemas de las democracias delegativas y los poderes fácticos encumbrados dentro del modelo neoliberal. A mi juicio, ello conduce a la necesidad de defender, en las agendas y debates políticos e intelectuales de las izquierdas criollas, una doble noción fuerte de soberanía (nacional y popular), privilegiando a nivel global la solidaridad ciudadana transnacional por sobre las políticas y acciones de todo estado que afecte, de un modo u otro, la vida y derechos de los cubanos: sea el cubano, el estadounidense o cualquier otro poder extranjero.

La lucha por una democratización sustantiva —en sus múltiples formatos representativos, participativos y deliberativos— no puede seguir siendo un tema tabú para las izquierdas de la isla, presa de resquemores, sectarismos o aproximaciones selectivas. Pero, en tanto el desarrollo de las reformas en curso están ampliando la brecha entre los individuos y grupos favorecidos por estas y aquellos ciudadanos convertidos —de la mano del mercado que no les acoge y del estado que aún administra y limita sus derechos— en perdedores del cambio (trabajadores urbanos y rurales, familias huérfanas de remesa, mujeres, negros y mestizos, ancianos, habitantes del interior del país) habrá que simultáneamente redefinir, revalorizar y defender los viejos temas de nuestra tan ponderada justicia social. La agenda de cualquier izquierda poscomunista y pos-neoliberal, políticamente democrática y culturalmente ilustrada, deberá poner en el centro, sin sesgos ni preeminencias, estas demandas emancipadoras, justicieras e igualitarias. Si es que desea ser una opción viable en el futuro de una nación que, pese a todo, se mueve.

NOTAS

1. Este poder ideológico se ejerce a través de la producción y transmisión de diversas ideas, símbolos, cosmovisiones y enseñanzas prácticas, canalizadas mediante las imágenes y las palabras.

2. El uso aquí de la palabra gremio alude a los intelectuales por su ubicación en la estructura social, la especificidad de su trabajo (con énfasis en lo mental y lo simbólico) y no como una suelta “unanimidad” en el discurso y las prácticas del sector.

3. La noción de esfera pública posee significados diversos que se solapan o contraponen pero comparten un núcleo de ideas comunes. Según Nancy Fraser (2009), siendo una arena institucionalizada de interacción discursiva, en la esfera pública se producen y circulan discursos críticos de las instituciones dominantes —estado, mercado— a la vez que se generan, debaten y reconstruyen diferentes significados sociales no siempre emancipadores: es una arena de creación de hegemonía y sentido común. Sus expresiones en el contexto cubano serán abordados más adelante en el texto.

4. Para una historia de los diversos creadores e ideas representativos de la vida intelectual a nivel internacional a lo largo del siglo XX, ver Watson (2007).

5. Dentro del grupo, la rama de los llamados intelectuales públicos se reconoce por su tendencia a desplegar la crítica social y a asumir roles de representación de intereses o identidades

colectivos, de preservación de la memoria y de ejercicio e invocación de la responsabilidad cívica. Lo que define a los intelectuales públicos es la perenne preocupación por la articulación y circulación de ideas, la vocación para intervenir en la esfera pública acerca de temas considerados relevantes (aunque ellos rebasan, en ocasiones, el área de especialización) y la pretensión de ejercer alguna influencia en ciertos segmentos de las élites y los públicos, en soporte u oposición a agendas políticas o fenómenos sociales específicos. Al diferenciarlos de los tecnócratas (ungidos de una formación depurada, científicamente rigurosa e instrumental) a los intelectuales públicos se les presenta como creadores culturales, socialmente intervencionistas y expresivos (Bourricaud 1990, 13–14).

6. Bobbio (1998) ha destacado la existencia de un tipo de intelectual revolucionario, que lucha contra el poder constituido en nombre de una nueva clase y sociedad, para el cual lo válido es aquello que sirve a la causa de la revolución. Y lo diferencia de aquel intelectual puro, que lucha contra todo poder en nombre de valores absolutos como la verdad y la justicia, a los que concibe, en sí mismos, como revolucionarios. En el caso cubano, parece acertado descubrir hoy, en la intelectualidad de izquierda isleña, ambas posturas; de cara a la ideología e instituciones propugnadas por el régimen vigente, así como por el espacio que demarcan para la participación ciudadana.

7. En el caso argentino, por ejemplo, se ha hablado del rol sobredimensionado de los encuestadores y opinólogos —ligados a los medios masivos— de los años noventa, incidencia a través de la cual llegaron a usurpar roles tradicionalmente atribuidos a otros expertos y, en un sentido más amplio, a los intelectuales (Pavón 2012).

8. Bobbio (1998) se consideraba a sí mismo como una suerte de intelectual mediador, capaz de involucrarse en debates y reflexiones políticos sin sujetarse a partidos y siempre promoviendo la reflexión y el diálogo dentro de las contiendas del momento.

9. En los extremos de ambas identidades encontraríamos al utopista (versión deformada del ideólogo) absorto en los fines y desdeñador de los medios y al técnico (degradación del experto) que operaría en sentido contrario. En Cuba, buena parte de los propagandistas e instructores del aparato del partido y de los técnicos a cargo de instrumentar las reformas en marcha parecerían corresponder, de forma bastante exacta, con estos roles degradados.

10. Los manifiestos y otras convocatorias afines (enfocadas sobre problemáticas relacionadas con injusticias y guerras) constituyen, según Norberto Bobbio (1998) el tipo de incidencia pública por excelencia de los intelectuales, lo que remite a su noción de *política de la cultura*. En los últimos tiempos, en círculo de intelectuales críticos y opositores de la isla, esta modalidad de acción ha cobrado vigencia, potenciada por la expansión de formas de comunicación y sociabilidad horizontales a través de redes sociales de alcance transnacional.

11. Duanel Díaz (2009, 15) ha destacado con acierto la especificidad de subordinar lo cultural a lo estatal como elemento implícito en la idea de *política cultural* del socialismo de Estado cubano —lo que lo diferencia, por su naturaleza, respecto a la lógica de los regímenes autoritarios y, por supuesto, democráticos de la región— a partir de la nacionalización de todos los medios de producción y reproducción de ideas e informaciones realizada por aquel desde sus primeros momentos. Desde mi perspectiva, siguiendo a Díaz y a Bobbio, la única forma de contrarrestar desde el gremio los efectos descuidadadores de tal proceder es articular, desde sus espacios, posicionamientos y acciones públicos que expandan la autonomía —en términos ideológicos, materiales, legales, etc.— de la condición intelectual y los sujetos que la detentan. Así a la estatizante *política cultural* habría que oponer políticas de la cultura forjadas desde la sociedad misma.

12. En Latinoamérica es ya tópico común, en sectores de la intelectualidad de izquierda, denunciar la criminalización de la protesta social desplegada por el neoliberalismo, convertido en suerte de pensamiento único y sentido común durante los pasados veinte años. Pero, paradójicamente, cualquier intelectual público y crítico de las izquierdas cubanas deberá enfrentar cotidianamente la penalización de la opinión, algo que antecede incluso al acto o la protesta, como condición de posibilidad para una política deliberativa, y un proceso creador progresistas.

13. Una de cuyas pruebas más fehacientes es la casi total ausencia de nociones como sociedad civil del léxico cotidiano de funcionarios y ciudadanos, pese a su empleo profuso en debates y publicaciones académicas, dirigidas a un público relativamente limitado y a menudo autorreferente. Como colofón, los aparatos ideológicos del Estado han instrumentalizado ocasionalmente el tópico, construyendo la idea de una *sociedad civil socialista*, potencialmente inclusiva de no ser por la definición acotada y caprichosa de sus contenidos: las llamadas organizaciones de masas y algunas socio-profesionales.

14. En realidad algunas saludables iniciativas —exposiciones de plástica, festivales de ballet y cine internacional, ferias y concursos literarios, etcétera— acogidas y/o acompañadas por el Ministerio de Cultura, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz, que tributan a la hegemonía del discurso revolucionario constituyen, más allá de la pertinencia, calidad y aporte estético y crítico de las obras expuestas, instrumentos hoy insustituibles del estado para recabar el apoyo crítico (creíble) de representantes destacados de la comunidad intelectual foránea y, en mucho menor medida, de sus interlocutores domésticos, mismos que sostienen la manguante legitimidad del régimen establecido.

15. Algunos de estos fenómenos no son privativos del caso cubano, aunque sus expresiones difieran. Varios autores latinoamericanos destacan el anti-intelectualismo acendrado de los políticos y de las sociedades de la región, junto a la peculiar relación de rechazo y dependencia que liga a los intelectuales y sus públicos (todos de clase media) respecto a la política práctica (Hofmeister y Mansilla 2003). Llamando la atención sobre el repliegue intelectual respecto a la política, la desideologización, y la disociación entre teoría y vida cotidiana, así como la existencia de versiones de un intelectualismo elitista (cerrado y autorreferencial) o populista, este último promotor de la mediocridad de la clase política.

16. Hago aquí un alto para un posicionamiento personal sobre este tema. En el contexto y coyuntura cubanos, de regimentación del pensamiento, donde el mero sostenimiento coherente de esos principios es difícil y meritorio, no se necesita sobredimensionar el actuar y los objetivos de dichos proyectos: un taller o revista no constituyen un movimiento social, aun cuando sería muy saludable que en sus foros emerjan y se articulen identidades y acciones posreflexivas. Son las personas concretas las que, autónomamente, pueden garantizar la existencia viva de estos espacios y, trascendiéndolos, incidir en la esfera pública con vocación transformadora. La denuncia de cualquier agresión física o verbal que busque acallar, sin argumentos, las voces del otro; el rechazo a la política de exclusión física de los espacios deliberativos, a la descalificación personal como sustituto del debate y a la represión político administrativa de ideas y portadores, así como, en todos los casos, el abandono de la participación cómplice en los foros erigidos o perpetuados bajo estos raseros, serían actitudes congruentes con la razón de ser y hacer de los intelectuales públicos, con independencia del signo ideológico de cada quien y las rencillas particulares acumuladas dentro del gremio.

17. La metáfora del pacto social posrevolucionario no niega los avances en inclusión, movilidad y participación de amplios sectores populares —sobre todo en la etapa 1960–1990— ni invisibiliza la resistencia de los sujetos revolucionarios a los dictados del poder, magníficamente reconstruidos en estudios recientes (Guerra 2012). Lo que destaca es, por un lado, la asimetría entre esta frágil ciudadanía —cuyos canales de organización y comunicación autónomos fueron capturados por el estado— y una burocracia que tempranamente monopolizó los recursos materiales y simbólicos del poder. Y que, sobre esa asimetría, se construyó un orden social en cuyo seno el estado proveyó políticas sociales amplias y generosas a cambio de formas de realización económica y socialización política acotadas (Fagen 1969), lo que suponía una ciudadanía restringida (Bobes 2000, 2007), leal al poder (encarnado en la tríada líder-estado-revolución) y que cede buena parte de sus derechos a la administración de éstos realizada por el poder revolucionario.

18. Un ejemplo paradigmático de esta postura, aunque enriquecido por aportes de otras tendencias políticas y perspectivas culturales, lo constituye el proyecto (ej. revista, foro de debate)

nucleado alrededor de Rafael Hernández y la revista *Temas* (ver el sitio de Internet <http://www.temas.cult.cu>).

19. Ver <http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/>

20. Sobre el Observatorio Crítico, ver http://es.wikipedia.org/wiki/Observatorio_Cr%C3%ADtico: <http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com>.

21. Ver http://www.cuba-progresista.org/default.asp?page=Arco_progres.

22. Ver <http://martianos.ning.com/profiles/blogs/declaracion-de-la-comision-aponte-ante-la-convocatoria-de-la>.

23. Ver <http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/06/23/propuesta-de-la-cofradia-de-la-negritud/>.

24. Ver <http://www.cir-integracion-racial-cuba.org/informacion/>.

25. Hoy se produce lo que Rafael Rojas (2014) ha denominado una nueva fase de la “guerra de la memoria” —diseñada y dirigida desde el estado cubano— que muta en sus formas y estrategias, combinando la puntual y selectiva reivindicación de autores y artistas exiliados o exponentes de la etapa prerrevolucionaria previa ocultación de sus facetas más contestatarias, de forma tal que pudiera asimilarse dentro de una política cultural aún signada por la sentencia fidelista de “dentro de la Revolución todo, contra de la Revolución nada”.

REFERENCIAS

- Bauman, Zygmunt. 2003. “Los intelectuales en el mundo postmoderno”. *Criterios* 34, pp. 134–160.
- Bobbio, Norberto. 1998. *La duda y la elección: Intelectuales y poder en la sociedad contemporánea*. Barcelona: Paidós.
- Bobes, Velia C. 2000. *Los laberintos de la imaginación: Repertorio simbólico, identidades y actores del cambio social en Cuba*. México, DF: El Colegio de México.
- Bobes, Velia C. 2007. *La nación inconclusa: (Re)constituciones de la ciudadanía y el cambio social en Cuba*. México, DF: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Bourdieu, Pierre. 2003. “La internacional de los intelectuales: La ciencia como profesión, la política como compromiso: por una nueva división del trabajo político”. *Criterios* 34: 161–166.
- Bourricaud, Françoise. 1990. *Los intelectuales y las pasiones democráticas*. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Chaguaceda, Armando, y Marlene Azor. 2011. “Cuba, políticas de participación y prácticas de autonomía: Organización, acción y discurso.” *Crítica & Emancipación* 3 (6): 9–35.
- . 2011. Medios y esfera(s) pública(s) en Cuba: Entre los malestares y los sueños. *Espacio Laical* 8 (4): 62–65.
- . 2010. *La campana vibrante: Intelectuales, esfera pública y poder en Cuba: Balance y perspectivas de un trienio (2007–2010)*. Xalapa, México: Universidad Veracruzana.
- De la Mora, Rogelio. 2007. “The Role of Intellectuals in Truth Commissions in Peru and Mexico.” En *Public Intellectuals in Contemporary Latin America*, editado por Avital H. Bloch, Rogelio de la Mora, y Hugo Cancino, 91–118. Colima, México: Universidad de Colima; Aalborg: Universidad Aalborg.
- Díaz, Duanel. 2009. *Palabras del trasfondo: Intelectuales, literatura e ideología en la Revolución Cubana*. Madrid: Editorial Colibrí.
- Dilla, Haroldo. 2014. “Tecnócratas, curas, izquierdistas y los campos políticos en Cuba”. *Este País* 274 (febrero), 4–9.
- Fagen, Richard. 1969. *The Transformation of Political Culture in Cuba*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Fraser, Nancy. 2009. “Política, cultura y la esfera pública: Hacia una concepción postmoderna”. *Criterios* 36: 52–64.

- Geoffray, Marie Laure. 2012. *Contester á Cuba*. París: Éditions Dalloz.
- Gramsci, Antonio. 1967. *La formación de los intelectuales*. México, DF: Grijalbo.
- Guanche, Julio C. 2008. *El continente de lo posible: Un examen sobre la condición revolucionaria*. La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y Ruth Casa Editorial.
- Guerra, Lillian. 2012. *Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption and Resistance 1959–1971*. Durham: University of North Carolina Press.
- Heras, Eduardo, y Desiderio Navarro, eds. 2007. *La política cultural del período revolucionario: Memoria y reflexión*. La Habana: Centro Teórico Cultural Criterios.
- Illades, Carlos. 2011. *La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México 1968–1989*. México, DF: Océano.
- Lechner, Norbert. 1990. *Los patios interiores de la democracia: Subjetividad y política*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Leyva, Anneris, y Abel Somohano. 2008. “Los intelectuales y la esfera pública en Cuba: El debate sobre políticas culturales”. *Temas* 56 (octubre–diciembre): 44–55.
- Lowy, Michael. 1978. *Para una sociología de los intelectuales revolucionarios (la evolución política de Lukács 1909–1929)*. México, DF: Siglo XXI.
- Manheim, Karl. 1963. *Ensayos de sociología de la cultura*. Madrid: Aguilar.
- Martínez Pérez, Liliana. 2006. *Los hijos de Saturno: Intelectuales y revolución en Cuba*. México, DF: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Pavón, Hector. 2012. *Los intelectuales y la política en Argentina: El combate por las ideas 1983–2012*. Buenos Aires: Debate.
- Ponte, A. José. 2010. *Villa Marista en plata*. Madrid: Editorial Colibrí.
- Rojas, Rafael. 2006. *Tumbas sin sosiego: Revolución, exilio y disidencia del intelectual cubano*. Madrid: Anagrama.
- Rojas, Rafael. 2014. “Memorias mutiladas”. *Diario de Cuba*. http://www.diariodecuba.com/cultura/1390249129_6776.html.
- Watson, Peter. 2007. *Historia intelectual del siglo XX*. Barcelona: Crítica.